



## **145ª Junta de Directores Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información**

### **Frente a las sombras de una cultura autoritaria**

En los últimos meses se profundizaron los ataques que ha venido sufriendo el ejercicio de la actividad periodística y que afecta a la libertad de expresión en nuestro país. Cuando sobre ambas se ejercen represalias, su vigencia se ensombrece. Porque pese a que formalmente se pueda todavía decir lo que se piensa, quien lo haga debe atenerse a las consecuencias persecutorias. Y esto es válido tanto para los periodistas como para los medios que no estén lisa y llanamente al servicio del gobierno o bajo su entera dependencia económica y política. Estas circunstancias han llamado la atención de los más importantes foros internacionales, quienes están poniendo a nuestro país en el centro de sus preocupaciones y advertencias.

Entre esas represalias se encuentran los bloqueos a las plantas impresoras de diarios, cuando ya las ediciones estaban impresas, que afectaron o impidieron la distribución y circulación de ejemplares ante la pasividad policial y la inacción de funcionarios que desobedecieron las resoluciones que los jueces dictaron para impedir que eso sucediera.

También hubo acciones que apuntaron al menoscabo personal y profesional de periodistas, directivos y empresarios de medios a través del trato prepotente y descalificatorio por parte de algunos funcionarios o de campañas de hostigamiento y desprestigio desde el cada vez mayor número de medios oficiales o afines al gobierno, virtualmente sostenidos por un uso arbitrario de la pauta oficial. Hay que agregar el aliento de escraches públicos que llegaron al extremo de estimular a niños y jóvenes a escupir sobre imágenes desplegadas en la vía pública de periodistas que osaron juzgar críticamente al gobierno.

Entre las consecuencias de criticar al poder como lo hace la prensa independiente en todos los países libres del mundo, están también las que se despliegan en el plano económico con el claro propósito de socavar las bases de sustentación de las empresas periodísticas. En particular las interferencias en la producción y comercialización de papel para diarios, que es un insumo vital para la actividad, o el gasto de enormes recursos públicos, que son de todos los argentinos, para

subsidiar de manera directa o disimulada a la prensa adicta, habiéndose llegado a proclamar oficialmente la "militancia" de la agencia estatal de noticias Télam, poniendo a dicha institución pública al servicio de la ideología de un gobierno en vez del público al que se debe un medio del Estado.

Esta larga cadena de ataques a la libertad de expresión tiene implicancias que van mucho más lejos de los intereses de los dueños de los medios de comunicación en general o de algún periodista en particular, que en todo caso serán siempre circunstanciales. Preocupa que el clima de intolerancia que alienta estos ataques, se extienda -como una oscura sombra- a diferentes actividades y sectores sociales, y sea síntoma del avance de una cultura que se propone imponer una forma única de concebir la realidad y de pensarla con los parámetros de quienes gobiernan. Con ello se tiende a limitar, o hasta silenciar, toda voz que, viniendo de donde viniere, contradiga el “relato oficial” de la realidad.

La libertad de expresión como posibilidad de manifestar las ideas propias y las ajenas sin censura ni represalia de ningún tipo es la más importante de las libertades institucionales. Sin ella pueden perderse todas las demás y su efectiva vigencia depende de la eficacia con la cual se pongan límites al poder. La democracia republicana es la columna que sostiene esos límites y ésta requiere la garantía del ejercicio de una prensa libre. Así lo ha consagrado la experiencia histórica y nuestra Constitución Nacional.

Sin prensa libre, bajo el imperio del autoritarismo y del silencio, podrán los gobiernos arrasar al resto de las instituciones de la república, controlar o desobedecer a los jueces, cambiar las reglas de la convivencia, disponer sin control alguno del patrimonio de todos los argentinos, manipular los indicadores de analfabetismo y de inflación y podrá seguir creciendo la corrupción y la pobreza sin que nadie lo denuncie.

La libertad de expresarse permite a todos y cada uno de los argentinos informarnos por fuera del discurso del poder. No es tanto un derecho de la prensa en particular cuanto de todo el pueblo en general. Si esa libertad se pierde corren peligro todas las demás libertades y derechos. A todos cabe, por lo tanto, el deber y el interés de defenderla.

28 de abril de 2011

Buenos Aires